

RICHARD WALKER

## CALIFORNIA A LA DERIVA

Ante el telón de fondo del apabullante avance de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato de 2010 –un incremento de 64 escaños con el que lograron hacerse con la Cámara de Representantes, seis senadores más y once nuevos gobernadores estatales–, California se desmarca<sup>1</sup>. El Estado dorado confirmó su posición como bastión demócrata del país, proporcionando victorias contundentes a los candidatos del partido en las elecciones a gobernador y al Senado. Los demócratas mantuvieron una sólida mayoría de dos tercios –32 de 53– en la delegación estatal para la Cámara de Representantes y conservaron mayorías contundentes en el Senado estatal (25-15) y en la Asamblea (52-28).

Que este noviembre California diese un vuelco a la tendencia dominante de oposición al gobierno resulta chocante, máxime cuando el estado ha padecido el azote de la Gran Recesión y ostenta la tercera tasa de paro más alta del país, ya que con un 12 por 100 de desempleo, sólo los niveles de paro de Nevada y de Michigan la superan. De hecho, California desempeñó un papel destacado en el desencadenamiento de la debacle que sufrió la economía de Estados Unidos tras 2007, lo que supone una inversión funesta de su tradicional papel histórico. Desde la fiebre del oro de la década de 1840 al *boom* de las nuevas tecnologías en la de 1990, el estado representó un centro mundial de inventiva y de producción de fantasía. Crisol en el que se gestó buena parte del carácter económico, político y tecnológico propio del siglo americano, ha sido el motor principal de la economía de Estados Unidos durante la mayor parte de los últimos cincuenta años. Pero en estos momentos se encuentra con grandes dificultades. ¿Cómo se explica este alarmante giro de los acontecimientos?

Desde la glorificación Ronald Reagan, hijo predilecto del estado, California ha estado al frente del giro neoliberal hacia el capitalismo global<sup>2</sup>. La

---

<sup>1</sup> Gracias a Juan Delara, Matt Williams, Ken Jacobs, Alex Schafran, Anthony Panarisse, Wendy Brown, Joe Matthews y Fred Glass por sus aportaciones; mi especial agradecimiento a Ashok Bardhan.

<sup>2</sup> Sobre la revolución de Reagan, véase mi «California Rages against the Dying of the Light», *NLR* I/209, enero-febrero de 1995.

historia de sus tribulaciones sonará familiar a los observadores de toda Europa, Norteamérica y Japón, que padecen a consecuencia de los mismos rasgos registrados bajo la marca del neoliberalismo: euforia financiera, deterioro de los servicios públicos, congelación de sueldos y aumento creciente de las desigualdades en razón de clase y de raza. Pero, dado el estatus de vanguardia del que presumía anteriormente, el Estado Dorado no debería tomarse meramente como otro caso más de un malestar generalizado. La situación de desesperación por la que atraviesa, no sólo proporciona una triste crónica del lodazal económico y político en el que han naufragado las democracias liberales, sino que constituye una advertencia sobre lo que el futuro puede deparar al resto del norte global.

### *Derrumbe hipotecario*

Más que cualquier otro lugar a excepción de Wall Street, California fue responsable de la burbuja económica de la década de 2000 y del desastre que se produjo a continuación<sup>3</sup>. La burbuja financiera que estalló en 2008, y que provocó el desplome de los bancos de inversión de Nueva York, se había concentrado en el crédito hipotecario vinculado al mercado inmobiliario de Estados Unidos. Mientras la alquimia mediante la cual hipotecas basura se transformaban en derivados crediticios y en vehículos de inversión tenía lugar en Wall Street, el crédito propiamente dicho se concentraban en los denominados «estados de arena»: Florida, California, Arizona y Nevada. La principal fuente de origen de hipotecas fue California, que actuó a modo de equivalente estadounidense de España, como la frontera especulativa de todo un continente. Aun siendo alrededor del 15 por 100 menor que España en términos de superficie y un 20 por 100 menor en términos de población, el PIB de California es un tercio más grande que el español, lo que la sitúa entre las diez mayores economías del mundo.

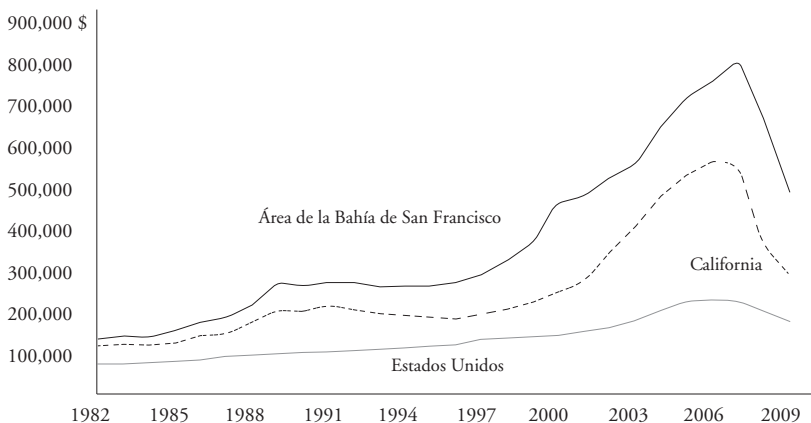
Entre 2000 y 2008, las entidades crediticias del estado emitieron 6 millones de hipotecas originales y 10 millones de préstamos refinanciados por un valor estimado de entre 3 y 4 billones de dólares, lo que representaba casi el 20 por 100 del crédito hipotecario global de Estados Unidos. California, asimismo, fue responsable de un espectacular 56 por 100 de los 1,38 billones de dólares emitidos en forma de hipotecas *subprime* entre 2005 y 2007 a escala nacional. El estado sirvió de hogar a cinco de los mayores prestatarios de hipotecas basura: Countrywide Financial, Ameriquest Mortgage Bank, New Century Financial, First Franklin Bank y Long Beach Mortgage Bank. La hiperactividad financiera no pillaba de nuevas a California: en la década de 1980 sirvió de escenario a la obsesión por los bonos basura de Michael Milken y a la implosión de las Saving & Loans [cajas de aho-

---

<sup>3</sup> Este epígrafe y siguientes están basados en Ashok Bardhan y Richard Walker, «California, the Pivot of the Great Recession», *Working Paper* 220-10, Institute for Research on Labor and Employment, Universidad de California, Berkeley.

ros], y en la década de 1990 fue el corazón de la mayor burbuja bursátil de la historia a medida que la inversión en las maravillas de Silicon Valley propulsaban el NASDAQ hasta cotas desconocidas.

Gráfico 1. *Mediana de los precios de la vivienda*



Fuente: California Association of Realtors; National Association of Realtors

El floreciente negocio hipotecario característico del nuevo siglo produjo, sin embargo, una significativa expansión del sector financiero. Entre 1996 y 2006, el número de empleos asociados al ramo de las finanzas, los seguros y la propiedad inmobiliaria aumentó un 27 por 100 hasta rozar el millón de puestos de trabajo. Ningún estado tenía tantos agentes inmobiliarios, brokers y vendedores de hipotecas: 60.000 en 2008. Ellos y sus promotores en los bancos se complacían canalizando los miles de millones de dólares que les llovían en forma de inversiones desde Wall Street a manos de compradores de vivienda desprevenidos. A razón de cientos de miles, los californianos se dejaron engatusar por hipotecas basura que no exigían entrada, ofrecían tipos incentivados, de interés variable y solicitaban escasa documentación.

Exacerbada por el furor hipotecario, la burbuja inmobiliaria estalló en California con mayor fuerza que en cualquier otro lugar de Estados Unidos. Ya en la década de 1970 los precios de la vivienda eclipsaban a los del resto del país, y se dispararon aun más durante los *booms* de las décadas de 1980 y antes de alza 1990 en la de 2000. Cuando en 2006 la burbuja alcanzó su punto álgido, la mediana del precio de la vivienda llegó a 594.000 dólares, más de dos veces y media por encima del promedio nacional que estaba situada en 221.000 dólares (véase gráfico 1). El área de la Bahía de San Francisco ostentaba los precios más elevados de cualquier región metropolitana del país, cuadruplicando casi la media nacional. En ningún estado, a excepción de Hawai, resulta la vivienda tan poco asequible. En 2006, con un precio medio de la vivienda más de diez veces la renta me-

diana estimada en 57.000 dólares –un ratio comparable a los de Londres o de Tokio–, California era terreno abonado para los mercachifles de los créditos basura, mientras los jóvenes hacían malabarismos para adquirir viviendas por encima de su valor real y la gente mayor refinanciaba sus hogares para ayudar a sus hijos, todos actuando bajo la premisa de que los precios de la vivienda nunca dejarían de aumentar.

La conjunción de dinero fácil y precios estratosféricos impulsó una gigantesca oleada de construcción inmobiliaria. En 2006, la venta de vivienda nueva alcanzó su punto álgido, al situarse en una tasa cercana a 200.000 al año, aproximadamente el 16 por 100 del total de la venta nacional, eso en un estado que apenas comprende el 12 por 100 de la población de Estados Unidos. La construcción y el sector inmobiliario fueron los mayores generadores de empleo de la década. Los altos precios se tradujeron en beneficios formidables para los constructores, como demuestran los casos de las compañías asentadas en el estado como KB, Shappell y Shea, así como los de los gigantes nacionales como Lennar, Centex y Horton. La inmensa mayoría del nuevo desarrollo inmobiliario tuvo lugar en los extrarradios residenciales de las grandes ciudades, aunque también se produjo un volumen importante de construcción interior y de torres de apartamentos. De hecho, California posee ahora una de las densidades urbanas más elevadas del país, especialmente en Los Ángeles y en el área de la Bahía.

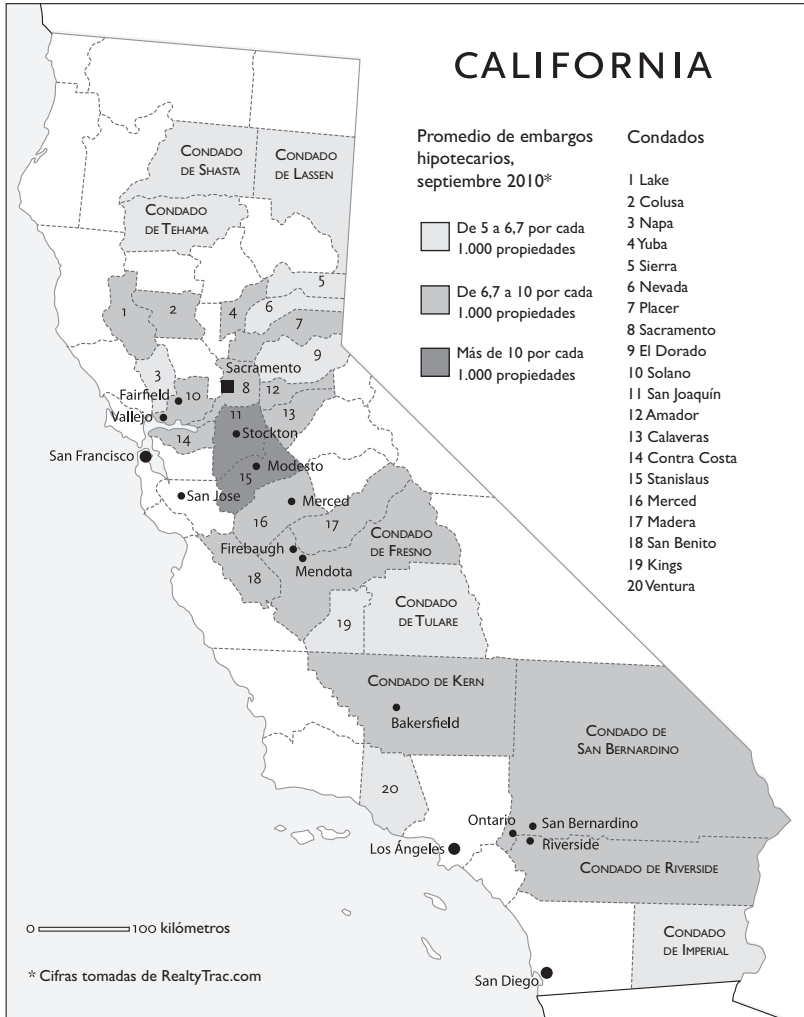
### *El crack inmobiliario*

Cuando estalló la burbuja inmobiliaria, California acabó con más créditos de dudoso cobro y más embargos hipotecarios que cualquier otro lugar, y la quiebra de sus bancos hipotecarios figuró entre las más sonadas del derumbe financiero. En 2007, New Century se declaró en bancarota y un debilitado Ameriquest fue a parar a manos de Citicorp; a principios de 2008, la Federal Deposit Insurance Corporation intervino IndyMac y Merrill Lynch echó el cierre al First Franklin, con el que se había hecho dos años antes; a mediados de 2008 Washington Mutual clausuró Long Beach Mortgage, que había adquirido hacía diez años, y un debilitado Countrywide fue absorbido por el Bank of America (de lo que más adelante habría de arrepentirse). El Washington Mutual, asentado en Seattle, se había inflado hasta convertirse en el sexto mayor banco de la nación y, en su ansia por realizar múltiples adquisiciones en el sur de California, llegó a situarse como el tercer mayor banco de los que operaban en el Estado Dorado. Su desplome a finales de 2008 representó el mayor hundimiento bancario registrado en la historia estadounidense hasta la fecha, sólo superado por el de Lehman Brother un mes más tarde. Mientras tanto, Wachovia Bank adquirió en 2006 el Golden West Savings de Oakland, el mayor emisor de hipotecas de interés variable del país, lo que le ayudó a alzarse con la cuarta posición de los bancos de Estados Unidos. A finales de 2008, el coletazo de los créditos incobrables de Golden West arrastró a Wachovia, que fue fagocitado por el Wells Fargo de San Francisco.

Tras la tormenta financiera llegó una oleada de embargos hipotecarios, mientras el mercado inmobiliario de California se desplomaba y cientos de miles de propietarios de viviendas dejaban de poder responder al pago de sus hipotecas. A finales de 2009 se habían producido cerca de 500.000 embargos hipotecarios en el estado, un quinto del total de los 2,5 millones que tuvieron lugar a escala nacional, y a mediados de 2010 en torno a 360.000 viviendas seguían estando sujetas a embargo. La sobre exposición de los hogares fue mayor en las ciudades interiores del sur de California, como Riverside, Ontario y San Bernardino, así como en las del Valle Central del norte de California, incluidas Stockton, Merced y Bakersfield. Aquí, tasas mensuales de embargos por encima de 50 de cada 1.000 viviendas se convirtieron en algo habitual, situándose entre las peores del país (véase el mapa).

Al mismo tiempo, en California la mediana del precio de la vivienda se precipitó entre el 35 y el 40 por 100, partiendo de los niveles de la burbuja, al tiempo que los bancos se deshacían de las viviendas recuperadas en mitad del pánico. En el verano de 2010 había 2,3 millones de hipotecas «sumergidas» (aquellas en las que el precio de la vivienda se sitúa por debajo del valor del préstamo pendiente de pago), lo que afectaba a una tercera parte de los titulares de hipotecas de California, frente al índice del 23 por 100 registrado a escala nacional. La pérdida de patrimonio total fue como mínimo de 2 billones de dólares respecto a un valor máximo 6 billones, un duro golpe a las finanzas y a las expectativas de la clase media. En los condados del interior como Merced o San Joaquín, la mediana de los precios descendió entre 2006 y 2010 un impresionante 60 por 100. El valor de la vivienda se ha mantenido con mejor pie en la costa, con la importante excepción de los barrios del centro de las ciudades habitados por la vieja clase trabajadora y por minorías.

La implosión inmobiliaria ha tenido otros resultados visibles: las zonas residenciales están jalonadas de casas vacías, y aquellos que han perdido la vivienda se han dispersado como el viento. La causa del desplazamiento inmobiliario ha sido asumida por los organizadores comunitarios. Los dos grupos más importantes son la organización eclesíástica PICO National Network, que cuenta con dos docenas de afiliados locales en California, y ACCE (Association of Californians for Community Empowerment, antigua ramificación californiana de ACORN), con una docena de oficinas en todo el estado. La Community Reinvestment Coalition de San Francisco, que agrupa a 250 agencias públicas y organizaciones sin ánimo de lucro, ha combatido las malas prácticas de los bancos en los barrios pobres durante treinta años. Las organizaciones activistas por los derechos de los inquilinos de los centros urbanos como Strategic Action for a Just Economy (SAJE) en Los Ángeles y Just Cause/Causa Justa en el área de la Bahía (ambas organizaciones son miembros de una coalición que trabaja a escala nacional, The Right to the City), también han estado combatiendo los desahucios ocasionados por los embargos hipotecarios.



El objetivo principal de la ira, no es de sorprender, son los bancos. Desde 2008 la ley estatal exige que los inquilinos de las propiedades embargadas reciban una notificación, y permite a las autoridades locales multar a los bancos por falta de mantenimiento de las propiedades vacías; pero los activistas tendrán que seguir presionando a los funcionarios municipales para que impongan leyes más severas. La mayor parte de los municipios no tiene ni idea del número de viviendas vacías que contienen ni de quiénes son sus propietarios, así que la ACCE ha llevado a cabo inspecciones puerta a puerta. Conseguir que los bancos renegocien los créditos para que la gente pueda permanecer en sus viviendas ha demostrado ser algo difícil de realizar, a pesar de la legislación estatal y federal. Los organizadores de base han intentado ejercer presión por otros medios: en abril de 2010, una coalición formada por grupos comunitarios, organizaciones religiosas y sindicatos mantuvo una protesta en San Francisco durante la junta de accio-

nistas del West Fargo Bank. Al margen de este tipo de acciones desarrolladas en el plano local, ningún movimiento unificado en contra de los bancos y de los embargos hipotecarios ha emergido a escala estatal<sup>4</sup>.

### *El valle de la desolación*

El prolongado *boom* inmobiliario reconfiguró la geografía de clase y racial del estado. Las clases altas, constituidas por blancos en su mayor parte, se apresuraron a trasladarse hacia la costa. Silicon Valley y la zona oeste de Los Ángeles quedan prácticamente fuera del alcance de cualquier persona que carezca de unos ingresos de seis dígitos, lo cual incluye a la mayor parte de los trabajadores administrativos, del sector de servicios y del comercio minorista, por no mencionar a la mano de obra industrial del estado. San Francisco, en particular, se ha vuelto drásticamente más rico, más viejo y más blanco. Entre tanto, la clase trabajadora, especialmente jóvenes familias de color, se han desplazado al extrarradio de las principales conurbaciones en un intento por encontrar a un tiempo trabajo y vivienda al alcance de su bolsillo. El área urbana de Los Ángeles, con cerca de veinte millones de habitantes, continúa expandiéndose por el Inland Empire, constituido por los condados de San Bernardino y de Riverside, cuyas poblaciones se duplicaron entre 1990 y 2010. El área de la Bahía ha desarrollado su propio inland empire en el Valle Central, donde colisiona con el área urbana de Sacramento y de Stockton, formando una megalópolis de alrededor de 10 millones de habitantes en el norte de California.

Incluso antes de la última recesión, California figuraba entre los 5 o 10 estados con mayor índice de desigualdad de la renta y al crecimiento de aquella, dependiendo del tipo de medida empleada. El Estado Dorado se encuentra a la cabeza del país en cuanto a proliferación de millonarios y de multimillonarios: sirve de hogar a 81 de los 400 hombres más ricos de Estados Unidos incluidos en la lista Forbes, frente a los 76 de Nueva York y los 25 de Florida. Mientras tanto, los empresarios no han cesado de contener el salario de los trabajadores corrientes, empleando como instrumento de presión la inmigración, el desempleo y las normas flexibles de contratación; el salario real de los trabajadores manuales apenas se ha movido un ápice desde hace cuarenta años, y los salarios que se sitúan en la parte más baja del escalafón han perdido terreno. La clase trabajadora de California lleva impreso un claro cuño racial, ya que está constituida por una abrumadora mayoría de inmigrantes e hijos de inmigrantes<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Por lo general, los activistas mantienen las distancias con sindicatos y demócratas, cuya implicación sería necesaria para ganar terreno a escala estatal, aunque el Service Employees International Union (SEIU) ha colaborado con la ACCE en las campañas contra los bancos.

<sup>5</sup> Jared Bernstein, Elizabeth McNichol y Andrew Nicolas, *Pulling Apart. A State-by-State Analysis of Income Trends*, Washington DC, 2008; Ruth Milkman, *LA Story*, Nueva York, 2006; véanse también los informes del Public Policy Institute of California, [www.ppic.org](http://www.ppic.org), y del California Budget Project, [www.cbp.org](http://www.cbp.org).

Cuando el azote de la Gran Recesión llegó a California, los trabajadores se llevaron la peor parte. A finales de 2009 estaban en paro 2,3 millones de personas o el 12,4 por 100 de la población activa, lo que suponía un 3 por 100 por encima de la media nacional. El subempleo, contando trabajadores a tiempo parcial y trabajadores desatentado, alcanzó un espectacular 24 por 100. La destrucción de empleo durante la presente recesión ha demostrado ser más severa que en las anteriores: mientras que el estallido de las empresas *punto.com* en 2001 se tradujo en un descenso del 2 por 100, y el crack de principios de la década de 1990 supuso una caída del 4 por 100, la actual recesión ha llevado la tasa de destrucción de empleo hasta el 9 por 100<sup>6</sup>. A pesar de una pálida recuperación de los beneficios y del comercio, se han llevado a cabo pocas contrataciones nuevas, y las perspectivas para el futuro del mercado laboral siguen siendo funestas.

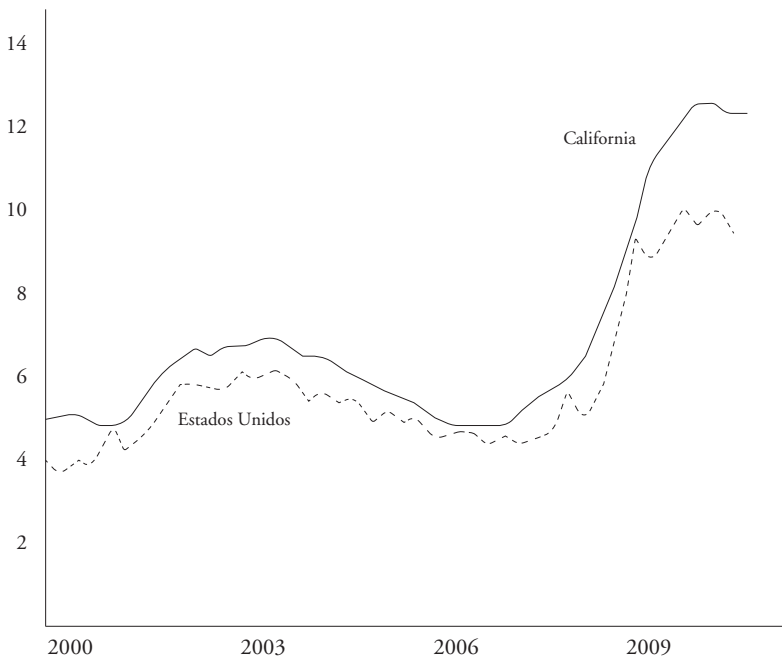
Los trabajadores de las zonas del interior han salido especialmente malparados. Han sufrido una tasa de destrucción de empleo dos veces superior a la de la costa, con el paro rozando el 30 por 100 y más en las poblaciones agrícolas situadas en el Valle Central como Firebaugh y Mendota. Se han producido despidos masivos en los sectores del almacenamiento, el transporte y la agricultura, pero los perjuicios mayores fueron ocasionados por el desplome inmobiliario: al sufrir la edificación de viviendas un descenso del 75 por 100, se perdió medio millón de puestos de trabajo en la construcción e industrias auxiliares, el sector inmobiliario y las finanzas hipotecarias.

La desigualdad flagrante, la orgía financiera y la inaccesibilidad de la vivienda no son meros excesos que coronen la por lo demás boyante economía californiana, sino que los signos del declive se aprecian por todas partes. El trabajo cualificado ha sido la base de la industria innovadora del estado —la producción aeroespacial y cinematográfica de posguerra de Los Ángeles, la electrónica de Silicon Valley— y, gracias a las nuevas tecnologías y a los sectores creativos, California consiguió librarse de la desindustrialización que asoló la zona industrial del noreste del país en la década de 1980. En realidad, durante décadas California ha sido el mayor estado manufacturero de la Unión, y todavía sigue proporcionando empleo a cerca de un millón de trabajadores en ese sector a día de hoy. Pero desde 1990 el volumen de producción ha descendido, y la mitad de los puestos de trabajo relacionados con la industria manufacturera ha desaparecido, situando la cuota de empleo del sector por debajo del 8 por 100. En el sur de California, el crecimiento más importante ha venido dado por el comercio internacional, a través de los puertos de Los Ángeles y Long Beach, que juntos conforman el mayor centro portuario de Norteamérica, alimentando un enorme corredor de almacenamiento, transporte y logística que discurre a través del Inland Empire. Así, pues, la región ha prosperado en parte gracias a las importaciones que han socavado la industria manufacturera estadounidense.

---

<sup>6</sup> Sylvia Allegretto, «The Severe Crisis of Jobs in the United States and California», Center on Wage and Employment Dynamics, Berkeley, agosto de 2010.



Gráfico 2. *Tasa de paro (%)*

Fuente: Current Population Survey, Bureau of Labor Statistics.

Entre tanto, las ocupaciones que requieren una baja cualificación –por lo general trabajos mal pagados, inseguros y a tiempo parcial– han aumentado drásticamente. Las mayores oportunidades de empleo se han dado en la educación, la sanidad y los servicios sociales, así como en el sector hotelero y en el de los servicios alimentarios. El sur de California, en particular, ha progresado gracias a un crecimiento desbordante de mano de obra inmigrante mal pagada, al igual que el Valle Central, durante largo tiempo el corazón de la industria agropecuaria de California (y todavía con creces la mayor zona de producción alimentaria), lo cual ha provocado que los sueldos de los trabajadores manuales caigan todavía más bajo. De hecho, entre 1980 y 2000, la renta media del California creció únicamente la mitad de lo que marcaba la tasa del resto del país. La industria electrónica de Silicon Valley, entre tanto, ha estado a la cabeza del país en cuanto a la exportación de empleo, despachando los trabajos administrativos de rango medio y los trabajos manuales relacionados con la electrónica a India, China y otros lugares.

Los inversores continuaron depositando capital excedente en el Estado Dorado durante la década de 2000, como habían venido haciendo durante las dos décadas de *boom* anteriores. Pero el caudal económico procedente de las hipotecas hizo poco por estimular el tejido industrial subyacente, más allá de inflar la construcción de viviendas durante los tiempos de la burbuja. La creación de empleo, que durante décadas rebasó a la del resto del país, se ha vis-

to nivelada a partir de 2000, y existen pocas razones para considerar que cualquier recuperación eventual pueda llegar a alterar este patrón, lo cual nos enfrenta a una cuestión problemática: si California se encuentra en tan baja forma, ¿qué augura esto para el conjunto de Estados Unidos?

### *Disparates presupuestarios*

El gobierno de California está hecho un completo desbarajuste. La causa inmediata es la peor crisis presupuestaria vivida en Estados Unidos, que remeda en cierto modo la que experimentó Nueva York en la década de 1970. Tras el caos presupuestario subyace una parálisis política en la que la mayoría ya no gobierna, el poder legislativo ya no legisla y los cargos políticos están en venta. En un plano más profundo, la debacle deriva del prolongado dominio de la política por parte de la élite adinerada y una minoría blanca cada vez más envejecida, con pocos deseos de responder a las necesidades de una población drásticamente reconstituida.

El Estado Dorado está ahora en permanente crisis presupuestaria. Posee el mayor presupuesto del país después del que atesora el gobierno federal –unos 100 millardos de dólares anuales, cuando alcanzó su punto máximo en 2006–, y presume del mayor déficit presupuestario de cualquier estado: 35 millardos de dólares en el ejercicio de 2009-2010 y 20 millardos de dólares en el de 2010-2011. El déficit del estado supone una quinta parte de los 100 millardos de dólares a los que asciende el déficit de los cincuenta estados al completo<sup>7</sup>. Estas penurias presupuestarias no son una novedad. Derivan en gran medida de un lamentablemente injusto sistema tributario, en el que los impuestos sobre la propiedad están reducidos al mínimo –tributan al 1 por 100 de su valor monetario– y las empresas soportan una carga insignificante, disfrutando de un tipo impositivo del 10 por 100 como máximo. Hasta finales de la década de 1970, California poseía uno de los sistemas tributarios más progresivos del país, pero desde entonces se ha verificado una continuada disminución de la carga tributaria. En la década de 1970, era uno de los cuatro estados a la cabeza en cuanto a tributación y gasto respecto a la renta, mientras que ahora se encuentra en el medio del pelotón.

El ariete de la ofensiva antitributaria fue la Proposición 13, aprobada mediante referéndum estatal en 1978, la cual congeló los impuestos municipales sobre la propiedad e impuso el requisito de una mayoría de dos tercios en la asamblea legislativa del estado para llevar a cabo *cualquier* subida de impuestos posterior, una barrera desalentadora en caso de existir una oposición organizada. La Proposición 13 fue creación de Howard Jarvis, miembro del grupo de presión en favor de la Apartment Owners' Association de Los Ángeles. El apoyo no le llegó tanto de los votantes sublevados contra

---

<sup>7</sup> Promedio de los ejercicios presupuestarios 2008-2012, informe de la National Association of State Budget Officers, junio de 2010.

la presencia y la injerencia del Estado, como del descontento provocado por el creciente aumento de los costes de la vivienda y de las cargas fiscales soportadas por la propiedad inmueble. Ello, sin emgargo, demostraría ser una cabeza de puente para el progreso del neoliberalismo estadounidense, que triunfó dos años más tarde con el ascenso de Reagan a la presidencia<sup>8</sup>.

El impacto de la Proposición 13 se dejó sentir de forma inmediata al perder los gobiernos municipales la mitad de sus ingresos. Sacramento tuvo que pagar el pato, mientras las autoridades condales y municipales sufrían una drástica pérdida de autonomía. Para empeorar las cosas, la Administración de Reagan recortó las ayudas federales. A largo plazo, la rebaja de impuestos hizo que el crecimiento de la recaudación fuese insuficiente con respecto a las necesidades y todavía más con respecto al aumento desaforado de la fortuna de los súper ricos que comenzó en la década de 1980. Con el repunte económico de aquella década, regresó la prosperidad, pero el entonces gobernador republicano del estado, George Deukmejian, empleó la afluencia de fondos para lanzar el mayor programa de construcción de prisiones de la historia de Estados Unidos, por lo que las cárceles consumen ahora una proporción casi tan grande del presupuesto estatal como la educación universitaria. Cuando el gran *boom* del sur de California se desplomó, el gobierno del estado se vio golpeado por un déficit respecto a los ingresos previstos de 14 millardos de dólares sobre un presupuesto de 50 millardos de dólares para el ejercicio de 1991-1992<sup>9</sup>.

El gasto se incrementó nuevamente durante el *boom* de finales de la década de 1990, pormor de una asamblea legislativa dominada por los demócratas que elevaba los tipos impositivos del impuesto sobre la renta y sobre las ganancias de capital, a fin de recaudar una pequeña porción de la riqueza que manaba de Silicon Valley<sup>10</sup>. El gobernador demócrata Gray Davis decidió recortar los impuestos sobre las ventas y para proporcionar otras formas de alivio fiscal por valor de 5,1 millardos de dólares durante el tiempo que duró su mandato. En el cambio de siglo, el estado estaba registrando superavits; pero el estallido de la burbuja de la Nueva Economía en 2000 se saldó con un déficit de 24 millardos de dólares sobre un presupuesto de 100 millardos de dólares para el ejercicio de 2002-2003. A estas alturas, la oposición al aumento de los impuestos se había endurecido, especialmente, entre los republicanos que seguían la estela de la segunda ola de neoconservadurismo de Newt Gingrich. Pero la Constitución de California, como la de cualquier otro estado de la Unión a excepción de Ver-

<sup>8</sup> Lenny Goldberg, «Proposition 13: Tarnish on the Golden Dream», en R. Jeffrey Lustig (ed.), *Remaking California: Reclaiming the Public Good*, Berkeley, 2010, pp. 42-59.

<sup>9</sup> Mike Davis, «Who Killed Los Angeles?», NLR 1/197, enero-febrero de 1993 y 1/199, mayo-junio de 1993; Ruth Gilmore, *The Golden Gulag*, Berkeley, 2007.

<sup>10</sup> Los ricos se quejan de que los tipos del impuesto sobre la renta de California son altas, pero la debilidad de los impuestos sobre la propiedad y sobre las ventas hace que el sistema en su conjunto a duras penas se pueda considerar progresista. L. Goldberg, «Proposition 13: Tarnish on The Golden Drian», cit.

mont, exige que los presupuestos estén equilibrados para que puedan ser aprobados por el gobernador y por los legisladores. La solución de Davis consistió en rebajar drásticamente el gasto y reducir el endeudamiento, lo que acarreó unos recortes estimados en 21 millardos de dólares y la destrucción de 2.000 empleos públicos en 2003.

Durante la vorágine económica desarrollada entre 2001 y 2003, la popularidad de Davis cayó en picado, habiéndose visto ya severamente deteriorada como consecuencia de su gestión de la crisis de la electricidad entre 2000 y 2001, cuando la desregulación de los mercados energéticos trajo como resultado apagones en todo el estado, mientras los beneficios de Enron batían todos los récords. Reelegido en 2002, Davis fue destituido mediante referéndum en 2003 y expulsado de su cargo en beneficio de Arnold Schwarzenegger, el último de los héroes hollywoodienses en catapultarse al ruedo público. Republicano liberal, firme defensor de la empresa, pero exento del moralismo típico de la derecha, y casado con una Kennedy, el «*Governator*» iba a enderezar el rumbo del estado. Pero la fama y la bravuconería no le bastaron, de manera que seis años más tarde salió de escena con los peores índices de popularidad que se recuerden, por debajo del 20 por 100. Ha sido un firme representante del conservadurismo empresarial, oponiéndose a cualquier incremento de los impuestos o reforma fiscal significativa, y echando la culpa del creciente déficit presupuestario a la asamblea legislativa y a los sindicatos.

La Gran Recesión hizo el agujero todavía más profundo. Para cerrarlo, el estado se ayudó de una inyección de miles de millones procedentes de la recaudación de los gobiernos municipales, en un momento en que el desplome de los valores de los bienes inmuebles socavaba todavía más las finanzas de las autoridades locales. La ciudad de Vallejo se ha declarado en bancarrota, Maywood se ha visto obligada a despedir a la totalidad de sus trabajadores, y otras localidades se tambalean ante el abismo. Las autoridades estatales han implementado su propio plan de austeridad: en 2009 recortaron el gasto en un drástico 20 por 100, con una reducción de 6 millardos de dólares en el presupuesto escolar, 3 millardos en el universitario y 4 millardos en el de sanidad<sup>11</sup>.

La crisis presupuestaria de California pone de manifiesto un profundo fracaso político y gubernativo. Los orígenes de esta parálisis residen en el declive de la asamblea legislativa, cuyos índices de popularidad son todavía más bajos que los de Schwarzenegger. Liderada por el Presidente de la Asamblea

---

<sup>11</sup> Para contrarrestar los recortes de Schwarzenegger, la California Labor Federation convenció al Presidente de la Asamblea John Pérez de que redactara un «Presupuesto de los Puestos de Trabajo», argumentando que los recortes no sólo resultan perjudiciales para aquellos que necesitan de los servicios, sino que contribuyen al continuo déficit de puestos de trabajo de California. En contra de la opinión popular, el número de funcionarios estatales es de los más bajos del país con respecto al ratio *per capita*, y el salario de los funcionarios del estado es ligeramente inferior al de los trabajadores del mismo nivel pertenecientes al sector privado. Véase Larry Gerston, «Are State Workers Overpaid?», blog *Prop Zero* del sitio web de la NBC de Los Ángeles, 17 de noviembre de 2010.

Jesse Unruh en la década de 1960, la asamblea legislativa de California despertaba admiración en todo el estado por su profesionalidad. Pero en la de 1980, bajo el mando de Willie Brown, en buena medida se había convertido en un sistema clientelista para favorecer al Partido Demócrata, el cual ha controlado el poder legislativo de forma continuada desde 1959. En 1990, los republicanos fueron a por Brown y atacaron al partido mayoritario mediante una proposición electoral que impuso límites a la reelección de los cargos electos. Los límites a la reelección neutralizaron la acción del poder legislativo, llevándose consigo el conocimiento colectivo, la experiencia profesional y los representantes más cualificados, junto con gran parte de la plantilla, cuya existencia resulta vital para que haya una legislación bien sopesada. Vendidos como un medio de poner freno a la injerencia de «intereses particulares», los límites a la reelección han consolidado el dominio de los grupos de presión de la industria sobre los legisladores<sup>12</sup>.

La capacidad de maniobra de la asamblea legislativa se ha visto todavía más limitada en virtud de lo que se ha convertido en un ritual anual de imponer cortapisas al presupuesto, a causa de la mayoría de dos tercios que se requiere para su aprobación (una norma introducida mediante proposición de ley en 1934). Pese a la concatenación de mayorías que los demócratas han mantenido sin cesar en la asamblea legislativa, desde la década de 1990 la minoría republicana se ha negado a ceder un ápice de terreno al aumento de impuestos, y en 2009 llegó a solicitar incluso un recorte de estos sobre la actividad empresarial estimado en 2,5 millardos de dólares antes de aprobar el presupuesto. Este noviembre los sindicatos del sector público –liderados por la California Federation of Teachers (CFT), la California Teacher Association (CTA), la California Nurses Association (CNA) y el SEIU, y respaldados por la State Federation of Labour– presentaron la Proposición 25 para permitir que el presupuesto fuese aceptado mediante el voto de la mayoría simple de la asamblea legislativa. Su aprobación por un margen del 55 frente al 45 por 100 de los votos fue uno de los resultados más significativos de las recientes elecciones. Desafortunadamente, la norma de la mayoría de dos tercios todavía está vigente en el caso del aumento de impuestos y la Proposición 26, aprobada este año, en la práctica hace que las cosas empeoren todavía más al extender la norma de la supermayoría a todo un abanico de tasas estatales y municipales. Esta última proposición, financiada por la Cámara de Comercio del estado y por Chevron, pone de manifiesto una vez más los efectos nocivos que tiene gobernar mediante proposiciones de ley: en cada una de las elecciones los votantes se ven asaltados por oleadas de medidas sujetas a la compraventa de las grandes empresas<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Christopher Witko, «The California Legislature and the Decline of Majority Rule», R. J. Lustig, *Remaking California*, cit., pp. 60-77.

<sup>13</sup> Otras proposiciones electorales que también han tenido éxito son la de redibujar las líneas de los distritos del Congreso y la interpuesta por los gobiernos municipales para impedir que el estado se apodere de sus fondos. Las propuestas para legalizar la marihuana y para dar un vuelco a los recortes de impuestos del año pasado se contaron entre algunas de las que fra-

Los esfuerzos por desterrar la Proposición 13, como el que llevaron a cabo los sindicatos del sector público en 2004, no han sido coronados por el éxito debido a que la cúpula del Partido Demócrata se niega a tocar la «tercera vía» de la política de California<sup>14</sup>. La mayor parte de los comentaristas de la izquierda liberal atribuyen esta parálisis a la existencia de un electorado contrario a los impuestos y de una oposición organizada por parte de la derecha, pero esto no encaja con los hechos. Electoralmente, los demócratas han dominado con facilidad durante las últimas cuatro décadas: sendas cámaras de la asamblea legislativa, uno o sendos escaños del Senado de Estados Unidos, la mayoría en la delegación de la Cámara, y las alcaldías de Los Ángeles, San José, Oakland y San Francisco; y, de Clinton en adelante, cada uno de los candidatos demócratas a la presidencia ha liderado el estado al menos con el 10 por 100 de los votos de ventaja.

Más que la vulnerabilidad electoral, es la identificación básica de los demócratas con el programa de Silicon Valley, Hollywood y los financieros –y su dependencia del dinero procedente de estas fuentes– lo que explica su falta de voluntad a la hora de tocar el sistema existente. Entre los demócratas más importantes del estado, pocos se identificaban de una forma tan cercana con la promoción de los intereses de las empresas de California en Washington como lo hacía la antigua Presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, residente de la lujosa zona de Pacific Heights de San Francisco y multimillonaria, gracias a una enorme cartera de inversiones en propiedades inmobiliarias y nuevas tecnologías. La senadora Dianne Feinstein, también residente en el área de la Bahía y casada con el gestor de un fondo de capital de inversión, el multimillonario Richard Blum, fue apodada en una ocasión «la mejor senadora que el dinero pueda comprar», y la declaración de su situación financiera ante el Congreso fue descrita en una ocasión como «del tamaño de una guía telefónica». Ellas forman parte del grupo de millonarios recientemente convertidos en congresistas demócratas –Tom Lantos, Ellen Tauscher, Pete Stark–, quienes han amasado fortunas gracias a las finanzas, las propiedades inmobiliarias y la electrónica<sup>15</sup>.

La elección al Senado de 2010 enfrentó a otra millonaria en el gobierno, Barbara Boxer, contra la inmensa fortuna de Carly Fiorina, antigua presidenta de Hewlett Packard. Como en cualquier otro lugar, la campaña se centró

---

casaron. Más detalles sobre las medidas electorales de California, en [www.ballotpedia.org](http://www.ballotpedia.org). Sobre los peligros de gobernar mediante proposiciones, véase Peter Schrag, *Paradise Lost. California's Experience, America's Future*, Nueva York, 1998.

<sup>14</sup> La iniciativa para revocar la norma de la mayoría de dos tercios en 2004 fracasó por 66 frente al 34 por 100. Algunos de los sindicatos que apoyaban de la Proposición 25 de 2010 se han impuesto como prioridad educar a la gente sobre la política fiscal. Pero las acciones para alterar el sistema existente –por ejemplo, gravando de nuevo la propiedad comercial, una de las principales lagunas tributarias– todavía tienen que despegar.

<sup>15</sup> Larry Benske, «The Best Senator Money Can Buy», *East Bay Express*, 18 de noviembre de 1994; Zachary Coile, «Bay Lawmakers among Wealthiest», *San Francisco Chronicle*, 26 de junio 2004.

esencialmente en asuntos económicos, con Fiorina haciendo valer el recorte de impuestos y la austeridad presupuestaria, mientras Boxer defendía el estímulo de Obama, así como su propio plan para atraer la financiación de Washington con el fin de impulsar la todavía en ciernes «economía verde» de California. Respaldada por los grandes despachos de abogados, por Hollywood y por los jubilados, los 22 millones de dólares gastados por Boxer superaron con creces a los 17 de Fiorina, y le facilitaron el 52 por 100 de los votos frente al 43 por 100 obtenido por Fiorina. Los sondeos a pie de urna otorgaron a Boxer el voto del 80 por 100 de los negros, el 65 por 100 de los latinos, y el 68 por 100 de los residentes de las grandes ciudades, un patrón que se ha repetido en otras contiendas que han tendido lugar durante este año.

### *Camino de Sacramento*

En una nueva reafirmación del control demócrata, Jerry Brown ganó la carrera a gobernador de este año por un contundente margen del 54 frente al 41 por 100. Del lado republicano, fue la multimillonaria Meg Whitman, antigua directora ejecutiva de eBay, quien gastó 160 millones de dólares de su fortuna personal para saturar las ondas con su mensaje y empapelar el estado con su imagen –aproximadamente tres veces la cantidad dispensada por ambos candidatos en la última carrera–, haciendo de ésta la campaña electoral a gobernador más cara de la historia de Estados Unidos. Su programa incluía los típicos remedios neoliberales basados en el recorte de impuestos para atraer a las empresas, la eficacia en el gobierno, y el freno de la regulación, todo ello aderezado con ataques contra los sindicatos del sector público<sup>16</sup>.

Whitman tenía poca experiencia política –incluso admitió votar sólo ocasionalmente– y carecía de grandes conexiones formales con el Partido Republicano, a pesar de haber codirigido la campaña de McCain en 2008. La derecha del Grand Old Party [Partido Republicano] la consideraba demasiado liberal en materia de homosexualidad, cambio climático e inmigración. Este último asunto contribuyó de manera decisiva al fracaso que sufrió en noviembre: tras haber defendido una línea dura contra el empleo de los inmigrantes sin papeles, se descubrió que había tenido contratada a una empleada del hogar mexicana ilegalmente durante nueve años; cuando el escándalo salió a la luz, Whitman abjuró de la mujer en cuestión, sosteniendo que debía ser deportada. Si bien esto contribuyó a distanciar a muchos latinos, –los sondeos a pie de urna sugieren que sólo obtuvo el 32 por 100 de sus votos– fueron sus conexiones con Goldman Sachs –miembro de su junta directiva entre 2001 y 2002, mantuvo carteras millonarias en varios fondos de inversión– lo que con toda probabilidad

---

<sup>16</sup> Michael Reich, «Can Californians Trust What Meg Whitman is Selling?», Center for American Progress Action Fund, agosto de 2010.

disuadió a los votantes con bajos ingresos sin importar su condición: tan sólo obtuvo el respaldo del 34 por 100 de los votantes con ingresos inferiores a 30.000 dólares anuales.

El vencedor, el demócrata septuagenario Jerry Brown, fue gobernador del estado entre 1975 y 1983 y alcalde de Oakland de 1999 a 2007; su puesto más reciente fue el de Fiscal General del estado. Una vez considerado como caballero andante de la izquierda liberal, fueron sus meteduras de pata a la hora de gestionar un excedente presupuestario las que lograron allanar el camino a la Proposición 13, y su constante mención del tema de una «era de límites» le convirtió en precursor retórico del neoliberalismo. En Oakland, su aportación más destacada consistió en revivificar la zona centro mediante el desarrollo masivo de condominios en medio del *boom* inmobiliario; también desempeñó un papel clave en la promoción de los colegios concertados. La campaña en clave moderada de Brown no mantuvo ningún compromiso concreto, pero en líneas generales se adhirió al programa neoliberal: promesa de reducción del gasto público, recorte de las pensiones de los funcionarios públicos, y presión a los sindicatos para «alcanzar un consenso». Posee buen olfato para los asuntos políticos, pero carece de un sólido apoyo de base social.

Brown venció por una cómoda diferencia, teniendo especial éxito entre los negros, los latinos y los habitantes de las grandes ciudades: los sondeos a pie de urna le otorgaron respectivamente el 77, el 63 y el 66 por 100 de los votos en estas categorías. Entre las personas con ingresos inferiores a 30.000 dólares anuales, su puntuación fue de un 58 por 100 y, entre aquellas con ingresos entre los 30.000 y los 50.000 dólares anuales, de un 63 por 100. Gran parte del mérito de su victoria le corresponde a los sindicatos del sector público, que constituyeron la columna vertebral de su campaña. El sindicato de enfermeras, el que poseía mayor disciplina y motivación, atacó a Whitman directamente, burlándose de sus anuncios, lanzando un juicio de accionistas contra eBay, y organizando piquetes en la casa que ésta posee en el enclave millonario de Atherton, al sur de San Francisco. Otros sindicatos, actuando bajo el paraguas de la California Labor Federation, prefirieron trabajar haciendo llamadas telefónicas o mediante visitas puerta a puerta. Pero no ha sido exclusivamente el continuado dominio de los demócratas sobre el movimiento obrero organizado lo que ha contribuido a que California mantuviera el predominio demócrata durante el futuro previsible; la situación demográfica también ha estado jugando a su favor.

### *¿Fin de la República blanca?*

Por debajo de las agitadas aguas en que se mueve la política californiana contemporánea discurren corrientes más profundas sacudidas por el cambio demográfico. Una causa fundamental del estancamiento político y gubernamental en que se halla el estado viene dada por la persistente «crisis



de representación»<sup>17</sup>. Parafraseando a Gramsci, podría decirse que la vieja República blanca está agonizando y que la zona transfronteriza latina todavía no ha visto la luz. La gente de origen europeo representa ahora una minoría en California —42 por 100— y la gente de color es mayoría: los latinos constituyen una tercera parte de los 37 millones de personas que conforman la población del estado, los asiáticos una octava parte y los afroamericanos una doceava parte. Unos 10 millones de personas nacidas en el extranjero residen ahora en el estado, lo que representa más del 25 por 100 de su población, y un 25 por 100 del total de los inmigrantes residente en Estados Unidos. La inmigración ha disminuido y se ha desplazado hacia otras zonas del país, al tiempo que la demanda de mano de obra ha descendido y la militarización de la frontera se ha incrementado bajo la Operación Gatekeeper. Sin embargo, los hijos de los inmigrantes todavía continúan engrosando las cifras de residentes no blancos, trabajadores y estudiantes.

Pero los blancos continúan dominando la política electoral, al constituir todavía dos terceras partes de los votantes regulares. La mayoría de color está enormemente subrepresentada, ya que muchos no poseen la ciudadanía (60 por 100) o bien no están censados (45 por 100). Las tasas de participación entre los latinos que reúnen los requisitos para votar son de un abismal 30 por 100, y el número de representantes latinos en los ayuntamientos, en la asamblea legislativa y en el Congreso continúa estando muy por debajo de lo que cabría considerar proporcionado; Antonio Villaraigosa es el primer alcalde latino de Los Ángeles desde el siglo XIX<sup>18</sup>. La mayoría relativa de blancos, ahora en franco retroceso, continúa ejerciendo una influencia desproporcionada en el estado. Marcadamente más viejo, más rico y dueño de más propiedades, al electorado blanco le corresponden puntos de vista conservadores: para muchos de ellos, los inmigrantes son un problema, el español una amenaza, y la ley y el orden el grito de guerra. Incluso los votantes blancos de centro tienden a considerar los impuestos como una carga, los colegios como algo de escaso interés, y el futuro colectivo como algo que no le incumbe.

Por el contrario, aunque los latinos y los asiáticos son a menudo conservadores en materias como el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo, están firmemente alineados en favor de la mejora de la escuela pública y de los servicios sociales. Las cifras en alza de nuevos votantes registrados están constituidas por una abrumadora mayoría de jóvenes, inmigrantes de primera o segunda generación y seguidores del Partido Demócrata<sup>19</sup>. Si las últimas elecciones pueden tomarse como un indicador, California habría experimentado un desplazamiento tectónico: el apoyo de la gente de co-

---

<sup>17</sup> J. Lustig, «Voting, Elections and the Failure of Representation in California», *Remaking California*, cit., pp. 99-120.

<sup>18</sup> Cifras tomadas del Public Policy Institute of California [Instituto de Políticas Públicas de California], [www.ppic.org](http://www.ppic.org).

<sup>19</sup> Jane Junn, «Why California Will Stay Blue», *San Francisco Chronicle*, 8 de noviembre de 2010.

lor fue una de las razones principales de que los demócratas mantuvieran un éxito continuado, a pesar del avance nacional de los republicanos. Que estos votantes se negaran a apoyar la legalización de la marihuana no es de sorprender, pero hay signos de que sus opiniones sobre la espinosa cuestión del matrimonio homosexual están cambiando, en el contexto de la batalla que aspira a revocar la prohibición aprobada como Proposición 8 en 2008.

Durante treinta años, los derechos de los inmigrantes han representado un asunto altamente controvertido, provocando oscilaciones importantes en el paisaje político. La atención se ha concentrado sobre las proposiciones electorales de corte nativista, las cuales han dado lugar a contramovilizaciones entre las comunidades de color. Una proposición de 1986 convirtió el inglés en lengua oficial del estado, mientras en 1994 la Proposición 187, respaldada por el gobernador republicano Pete Wilson, trató de impedir a los inmigrantes ilegales el acceso a la escuela y a los servicios sociales; a pesar de haber sido anulada por los tribunales, empujó a millones de nuevos ciudadanos del estado a censarse y a votar, en su mayor parte en favor de los demócratas. En 1996 la Proposición 209 acabó con los programas de discriminación positiva de California. Más recientemente el foco de atención se ha desplazado hacia las leyes contra la inmigración de Arizona; las protestas de las comunidades latinas han barrido California<sup>20</sup>.

De la mano de la nueva demografía ha llegado una nueva geografía política. La vieja división separaba el norte y el sur, con un siglo de dominación sobre el gobierno estatal por el área de la Bahía, seguida por la contrarrevolución animada por el estallido de la Nueva Derecha en el populoso sur de California en la década de 1980. Ahora, la división geográfica discurre entre el este y el oeste, separando la costa de los valles del interior. En líneas generales, podría decirse que la costa es rica, urbana, políglota y liberal; el interior vive al día, es pobre, cristiano, rural (o urbanizado desde hace poco) y conservador. Aunque la población del interior está cada vez más conformada por latinos y gente de la clase trabajadora, la política continúa estando dominada por una elite blanca local, bien procedente de las filas del antiguo régimen agrícola, o bien de las de un nuevo grupo de propietarios de inmuebles, y respaldada por un electorado blanco tan reaccionario como el de cualquier estado en mano de los republicanos<sup>21</sup>.

En el sur de California, los sindicatos han llevado a cabo tentativas, con el fin de organizar las operaciones de almacenamiento o la industria de la construcción en el Inland Empire. En el norte, la CFT ha aunado esfuerzos con la Alliance for a Better California, agrupando a organizadores comunitarios del Valle Central, a organizaciones eclesiásticas y a activistas latinos y afroameri-

---

<sup>20</sup> Arizona reedita la experiencia de California en la década de 1990: posee proporcionalmente el peor déficit presupuestario de la actualidad y el mayor tráfico de inmigrantes clandestinos ahora que California ha vallado su frontera.

<sup>21</sup> Véanse Lisa McGirr, *Suburban Warriors: The Origins of the New American Right*, Princeton, 2001, y Frédéric Douzet *et al.* (eds.), *The New Political Geography of California*, Berkeley, 2008.

canos, al tiempo que la Labor Federation ha logrado consolidar los consejos de trabajadores en el Valle Central, con el fin de promover campañas de censo de votantes. Los organizadores comunitarios de PICO y ACCE están bien asentados en las poblaciones del interior, procurando impulsar movilizaciones en materia de reforma fiscal, escuela pública, sanidad e inmigración. Sin embargo, el activismo de las ciudades costeras se mantiene muy por debajo de estos niveles.

### *Engañando a los niños*

Las crisis económica y presupuestaria actuales no son más que los últimos síntomas del lento retroceso del bienestar social que se impuso en California durante la posguerra. Aquí, como en cualquier otro lugar, la edad de oro del capitalismo estadounidense se cimentó sobre una sólida base, que combinó inversión pública con una administración competente. Aquí, de igual modo, el firme avance del neoliberalismo ha debilitado el sector público y amenaza con envenenar asimismo las fuentes del capitalismo emprendedor. Esto se muestra de forma especialmente evidente en el campo de la educación, de los niveles de primaria a la universidad. La una vez gloriosa escuela pública del estado ha caído de rodillas. La educación primaria y la secundaria (K-12: de la guardería a los doce años de edad) se han precipitado de los primeros a los últimos puestos del ranking nacional, en virtud de un rango de medidas que van de las pruebas oficiales a la tasa de abandono escolar, estando ésta última situada actualmente en un 25 por 100. Hay muchas razones que justifican esta debacle, pero el corazón del problema reside en la miseria, tanto de los alumnos como de las propias escuelas, a medida que las desigualdades económicas y los recortes presupuestarios se ciernen sobre las cabezas de los niños californianos.

En California la pobreza infantil ha alcanzado niveles sin precedentes, situándose en torno al 20 por 100. El estado alberga la sexta parte de los niños sumidos en la pobreza de Estados Unidos, frente a la décima parte de treinta años atrás. Los niños pobres tienen un rendimiento escolar más bajo que el de sus compañeros pudientes, no siendo de extrañar, por consiguiente, que las calificaciones en las pruebas oficiales mantengan una estrecha correspondencia con la clase (y, por consiguiente, con la raza) de las comunidades en las que viven<sup>22</sup>. Al mismo tiempo, desde 1970, el gasto escolar por alumno ha disminuido drásticamente, y California ha pasado de ocupar uno de los cinco primeros puestos a ocupar uno de los cinco últimos, en la misma liga que Mississippi. Antes de que se aprobara la Proposición 13, el 75 por 100 de la financiación de los distritos escolares procedía de los impuestos municipales sobre la propiedad local; ahora, esta proporción ha quedado reducida a una tercera parte, y Sacramento se

---

<sup>22</sup> Para obtener más datos, véase la página web del National Center for Children in Poverty, [www.nccp.org](http://www.nccp.org).

ha visto obligado a hacerse cargo de la diferencia. Con cada nueva recesión, han sobrevenido nuevos recortes del gasto, hasta dejar los programas escolares en los huesos; música, arte y otras optativas son lo primero en desaparecer. Miles de profesores han sido despedidos, y el número de alumnos por aula ha aumentado hasta cifras inmanejables.

En 1988 se produjo un intento de contener la hemorragia en los fondos educativos mediante la Proposición 98, que obligaba a destinar el 40 por 100 del presupuesto anual del estado a la educación K-12. Sin embargo, la Proposición no puede garantizar niveles de financiación absolutos y resulta superflua cuando el estado no tiene dinero para gastar. Con cada nueva recesión, una nueva oleada de bancarrotas se ha extendido por los distritos escolares de California, afectando siempre a los lugares más pobres, como Richmond en el área de la Bahía o Lynwood en el Condado de Los Ángeles. En los casos más complicados, como el de Okland en 2003, el estado envió a un equipo de profesionales para reducir el presupuesto y meter en cintura las expectativas de la gente. Hoy en la lista de distritos escolares afectados por graves apuros financieros el estado contabiliza 175 de los 1.050 existentes. Los colegios concertados son el remedio favorito de los neoliberales; aunque controlados nominalmente por los distritos escolares, su gestión se lleva a cabo mediante proveedores externos, generalmente con ánimo de lucro. No hay pruebas de que sus resultados sean mejores que los de las escuelas públicas en promedio; lo esencial es que no están cubiertos por los convenios sindicales que permitirían a los profesores asegurarse una paga digna y reclamar otra serie de protecciones laborales.

Si la opinión prevaleciente reza que las escuelas son las responsables de la quiebra del estado, otra idea todavía más perniciosa en circulación es que los propios niños son un fracaso. No saben leer, obtienen malos resultados en las pruebas oficiales, son impacientes, se comportan con insolencia, y no son capaces de acabar el bachillerato. La solución: expulsar a los alborotadores, acordonar los patios de las escuelas e introducir a las patrullas de policía en los colegios; obligar a los alumnos a malgastar horas haciendo deberes tediosos y repetitivos, de manera que los angustiados padres se convenzan de que sus hijos están recibiendo una educación estricta; y, por encima de todo, conseguir que permanezcan sentados, someténdolos a una prueba tras otra.

Todo esto ha sucedido ante el telón de fondo de las transformaciones en la composición de la población escolar que han tenido lugar en California, con la incorporación a las aulas de millones de hijos de inmigrantes. Los latinos representan la mitad de los niños en edad escolar del estado, mientras que la otra mitad procede de hogares en los que se hablan aproximadamente 100 lenguas maternas diferentes. Aprobada en 1998, la Proposición 227 eliminó la mayor parte de las clases bilingües, fortaleciendo la enseñanza del inglés y restringiendo la enseñanza en otras lenguas. Los nativistas sostienen que el sistema escolar está desbordado por culpa de la inmigración masiva; pero teniendo en cuenta que la afluencia de inmigran-

tes entre 1975 y 2000 no superó los niveles registrados entre 1950 y 1975, es evidente de que la falta de inversión en las escuelas posee un tinte racial: mientras la oleada de inmigración de posguerra atrajo a personas blancas de origen estadounidense, la segunda oleada atrajo a personas no blancas de padres extranjeros.

El declive de las escuelas pone de manifiesto «cuarenta años de inclusión fallida»<sup>23</sup>. Tras la aprobación de la Ley de Derechos Civiles en 1964, se desataron batallas feroces en las ciudades de todo el país a propósito de la integración escolar. A principios de la década de 1970, el fallo de los tribunales obligó a las ciudades a transportar a los alumnos de un distrito a otro en autobús (aunque no entre las ciudades y las zonas residenciales), con el fin de combatir de forma más eficaz la segregación en la educación. Los Ángeles y otras innumerables zonas fueron desgarradas por los disturbios provocados por el transporte escolar. Otro hito se produjo en 1971, cuando el Tribunal Supremo de California adoptó la resolución Serrano, la cual obligaba a las autoridades estatales a redistribuir los ingresos procedentes de la recaudación fiscal para contrapesar las flagrantes desigualdades de recursos y financiación existentes entre los distintos distritos escolares. Pero pese a los esfuerzos realizados para igualar la financiación, los desequilibrios entre distritos son ahora más acusados que nunca. La clase media alta se ha protegido sacando a sus hijos del sistema escolar público y enviándolos a instituciones privadas; ocasionales en el pasado, tales retiradas se han convertido en algo habitual, junto con otro tipo de alternativas al alcance de los más pudientes, como mudarse a zonas residenciales más prósperas y blancas, donde la base imponible es más alta. Si los fondos públicos resultan insuficientes, los padres donan dinero de su propio bolsillo para aumentar las arcas de las escuelas. En julio de este año, una combinación de grupos de la sociedad civil presentaron una demanda judicial contra la injusticia en la financiación escolar, con la esperanza de producir una sentencia «hija de Serrano».

La principal oposición a la situación actual de la educación procede de los sindicatos de profesores. El CTA lideró una batalla para imponer la Proposición 98 y constituye una fuerza con la que es obligado contar en Sacramento. Las secciones municipales del CTA han tratado de mantener una postura firme en contra de los colegios concertados y de los despidos, y los profesores han recibido el respaldo constante de los padres y de los organizadores comunitarios. El CFT también se ha mantenido activo; puso en contacto a la California Schools Coalition con el SEIU y al sindicato de trabajadores de la función pública con el de los sanitarios, el AFSCME. Entre marzo y abril de 2010, la Coalición participó en una marcha que durante todo un mes viajó de Los Ángeles a Sacramento con el fin de defender la educación y los servicios públicos, haciendo campaña a favor de las refor-

---

<sup>23</sup> Ronald Schmidt, «Immigration, Diversity and the Challenge of Democratic Inclusion», J. Lustig, *Remaking California*, cit., pp. 121-39.

mas de la financiación escolar y del sistema tributario. Los grupos comunitarios, por su parte, también han establecido una coalición –Parents and Students for Great Schools– con el fin de impulsar una financiación mejor y más equitativa. Pero inmersas como están en la vorágine de la Gran Recesión, las escuelas continúan su debacle arrastradas por el torbellino<sup>24</sup>.

### *¿La educación superior?*

El sistema de tres niveles sobre el que se asienta la universidad pública de California es con mucho el mayor de Estados Unidos y fue considerado uno de los mejores del mundo en el pasado. La Universidad de California, que dispone de nueve campus, con Berkeley como buque insignia, es reconocida en todas partes como la mejor universidad pública del país. El acceso libre a los *community colleges* de California, con su programa universitario de dos años de duración, atienden anualmente a cerca de tres millones de alumnos distribuidos en 110 campus diferentes, mientras que los 23 campus de la Universidad Estatal de California acogen a cerca de medio millón de estudiantes cada año. Estas dos últimas universidades atienden al grueso de los estudiantes de color, procedentes de la clase trabajadora de California, mientras tratan de abrirse camino en el hostil mercado laboral.

La educación superior ha padecido las frías rachas del declive presupuestario durante veinte años. Los sistemas de la Universidad Estatal de California y de los *community colleges* californianos se han llevado la peor parte. Han sufrido los recortes más severos en los períodos de recesión y han recibido una compensación pequeña durante los tiempos del *boom* económico. Al menos la mitad de la plantilla de profesores de la Universidad Estatal de California y dos terceras partes de la de los *community colleges* del Estado son ahora profesores adjuntos, en lugar de titulares en línea con lo que marca la tendencia nacional<sup>25</sup>. La Gran Recesión se ha abierto camino en todos los presupuestos universitarios. En el verano de 2009, las autoridades de la Universidad de California impusieron un recorte del 20 por 100 en el presupuesto corriente, una reducción de entre un 5 y un 10 por 100 en los salarios, y una subida del 32 por 100 en las tasas de matrícula. La contratación de profesorado sufrió una brusca interrupción y cientos de miembros de la plantilla fueron despedidos. Los sistemas de la Universidad Estatal de California y de los *community colleges* californianos, enfrentados a recortes similares, han eliminado cientos de asignaturas, prescindido de profesores asistentes y titulares, e interrumpido obras que estaban en construcción, mientras subían las tasas de matrícula alejando a cientos de miles de estudiantes.

<sup>24</sup> David Bacon, «California's Perfect Storm», *Rethinking Schools*, otoño de 2010.

<sup>25</sup> Sobre los cambios en la educación en sentido más amplio, véanse Frank Donoghue, *The Last Professors*, Nueva York, 2008, y Christopher Newfield, *Unmaking the Public University*, Cambridge, (MA), 2008.

Dentro de las universidades, se está produciendo una creciente división de clase. Los administradores y los profesores titulares de primera línea de la Universidad de California se han llenado los bolsillos a base de inflar enormemente sus sueldos, mientras que los profesores titulares, los profesores más jóvenes y el profesorado de la Universidad Estatal de California y de los *community colleges* se ven en graves apuros para pagar el alquiler. Un estudio demuestra que, durante la última década, se ha duplicado la contratación de cargos administrativos de la Universidad de California, mientras que otro tipo de empleos se ha incrementado únicamente en una tercera parte. En Berkeley, el informe de un consultor señala que decenas de millones de dólares se están empleando de forma ineficiente en gastos relacionados con adquisiciones y niveles adicionales de gestión; pero todavía no ha rodado la cabeza de ningún directivo, cayendo el peso de la crisis sobre las espaldas de los empleados de categoría más baja mediante despidos y reestructuraciones de personal<sup>26</sup>. Los recortes en los departamentos universitarios dejan al profesorado poco tiempo para investigar y a los estudiantes menos apoyo para adentrarse en la vida universitaria. Al mismo tiempo, la subida de las tasas de matrícula se ha convertido en un ritual habitual; aunque la Universidad de California ha mantenido un decente sistema de becas para los estudiantes que lo necesitan, la imposición de tasas de matrícula de más de 11.000 dólares anuales –que con toda probabilidad seguirán aumentando de manera irremediable– está haciendo que muchos otros estudiantes, especialmente los de color, salgan huyendo.

La administración de la Universidad de California está ansiosa por reestructurar la universidad con el fin de incrementar sus ingresos. Entre las propuestas que se barajan está la creación de un diploma de tres años de duración para que los estudiantes concluyan más rápido su ciclo formativo y para atraer a un mayor número de alumnos extranjeros, quienes como poco pagan el doble que los alumnos estadounidenses. Otra idea consiste en ofrecer más cursos y diplomas *online*, como un medio de vender la marca de la Universidad de California en el mundo entero. Mientras tanto, las escuelas profesionales ubicadas en el sistema de la Universidad de California –medicina, derecho, sanidad pública y demás– están recibiendo autorización para poner a su «producto» precios tan altos como estimen oportuno. Todas estas iniciativas socavan los ideales de la universidad pública. La noción de la educación como inversión social, cuyo impulso contribuye al avance del conocimiento humano, es sustituida por una actividad encaminada a hacer dinero en la que los académicos producen inventos que pueden ser patentados y los estudiantes realizan una inversión en su propio «capital humano», financiándose mediante la solicitud masiva de

---

<sup>26</sup> Charles Schwartz, «Who Pays the Hidden Cost of University Research?», blog *Minding the Campus*, 9 de agosto de 2010. Para más información sobre la reestructuración de Berkeley y las críticas del profesorado, véase la sección «Reforming the University» del sitio web de la Faculty Association [Asociación del Profesorado] de la Universidad de California Berkeley, [ucbfa.org](http://ucbfa.org).

créditos. Si continúa la tendencia actual, podremos estar asistiendo al fin de la educación humanista para todos a excepción de la elite<sup>27</sup>.

El año pasado los estudiantes procedentes de uno y otro lado del estado se alzaron con furia en contra de los recortes y el aumento de las tasas de matrícula bajo el eslogan de «al infierno las subidas, no al aumento de los costes». De Santa Cruz a Berkeley y de a Los Ángeles, promovieron debates públicos, mantuvieron protestas y ocuparon edificios, en una demostración de fuerza que no se recordaba desde la década de 1960. Miembros de la plantilla y estudiantes se manifestaron masivamente a lo largo del sistema de la Universidad de California desde finales de septiembre de 2009, y un grupo de estudiantes de Santa Cruz inició una oleada de ocupaciones, que se extendió por UCLA, Berkeley y la Universidad de California Davis en el mes de noviembre<sup>28</sup>. Los administradores de la Universidad de California respondieron llamando repetidamente a la policía –tanto a las fuerzas de la Universidad como a la policía municipal– para disolver las protestas y poner fin a las ocupaciones. Los directivos de la Universidad de California siguieron adelante con la subida de las tasas de matrícula de todos modos.

En enero de 2010, en respuesta a la agitación generada por las protestas, el gobernador concedió una mayor porción del presupuesto del estado a la educación superior. Entonces, el 4 de marzo, decenas de miles de estudiantes y profesores procedentes de todo el estado, de la escuela primaria a la universidad, protagonizaron una huelga masiva y convocaron manifestaciones en defensa de la educación pública; éstas se extendieron a continuación a lo largo de los campus de todo el país. Lo cierto es que la asignación de fondos estatales aumentó un tanto en el presupuesto aprobado a principios de otoño, pero la junta de gobierno se apresuró a subir las tasas de matrícula otro 8 por 100 rápidamente, pese a la nueva ronda de protestas que tuvo lugar el 5 de octubre y a las confrontaciones violentas entre la policía y los manifestantes producidas durante el mitin convocado el 17 de noviembre en San Francisco. Pero los estudiantes tienen por delante una tarea de Sísifo, al tratar de hacer frente simultáneamente a un gobierno y a una administración recalcitrantes. También existen divisiones en el seno del propio movimiento estudiantil, en torno a de tres líneas fundamentales: entre la masa inerte y las organizaciones estudiantiles que promueven un mayor activismo; entre éstas últimas y los «okupas» más radicales; y entre la izquierda blanca y los estudiantes radicales de color. Aunque no se trata de diferencias verdaderamente profundas, llevan tiempo jugando en su contra.

---

<sup>27</sup> Aunque la gente prefiere la idea de aumentar los impuestos antes que incrementar las tasas estudiantiles, de acuerdo con un sondeo de opinión conducido recientemente por el Public Policy Institute of California; véase Mark Baldassare *et al.*, «Californians and Higher Education», noviembre de 2010, disponible en [www.ppic.org](http://www.ppic.org).

<sup>28</sup> Para más información sobre las protestas y los cambios en la universidad, véanse los blogs *Occupy California* y *Remaking the University*.



En el seno del profesorado, la oposición más fuerte al recorte presupuestario procede de la California Faculty Association del sistema de la Universidad Estatal de California y de la CFT, que representa una amalgama compuesta por profesorado de la Universidad Estatal de California y de los *community colleges* californianos, por profesores adjuntos de la Universidad de California y por maestros de enseñanza K-12. Una minoría de los profesores de la Universidad de California todavía está sinceramente preocupada por los objetivos de la universidad pública y se ha concentrado a favor de la causa, especialmente bajo la bandera de SAVE UC en Berkeley y del Faculty Organizing Group en Santa Cruz<sup>29</sup>. Pero la elite del profesorado reniega de todo esto, acomodándose en sus laboratorios, amparándose en la buena fe de los administradores, persiguiendo becas para sus grupos de investigación y ganando dinero a cambio de sus servicios como consultores.

### *¿El declive del Estado Dorado?*

California ha estado viviendo de las rentas del pasado. El *New Deal* y los períodos de posguerra transmitieron al país un inmenso legado de inversiones en infraestructuras. Escuelas y universidades dieron buena cuenta de ello, junto con las redes de carreteras, las presas hidráulicas y los sistemas de conducción de agua; y los parques naturales más avanzados del mundo. Durante los últimos treinta años, la recaudación tributaria ha sido escasa y se ha producido muy poca inversión. Para que las cosas siguieran en marcha, Sacramento ha ido endeudándose cada vez más a través de una gigantesca emisión de obligaciones, con el fin de mantener las prisiones, los parques y las plantas de tratamiento de aguas. Mediante un juego de prestidigitación, los californianos se han convencido de que es posible al mismo tiempo pagar pocos impuestos y disponer de infraestructuras públicas de alta calidad. El truco se repitió una y otra vez, en claro paralelismo con la excesiva acumulación de deuda hipotecaria que se produjo a escala nacional. En consecuencia, la calificación de títulos de California es peor que la de cualquier otro estado.

Los ejemplos de la falta de inversión abundan. Las autopistas de California están consideradas como las segundas peores del país. Sus prisiones están tan abarrotadas que han pasado a manos del gobierno federal. Y los fondos para las pensiones de los profesores y de la plantilla de la Universidad de California se encuentran todos en un estado calamitoso, ya que el gobierno estatal dejó de aportar sus contribuciones durante la recesión de principios de la década de 1990, dejando los fondos acumulados en manos de los mercados bursátiles. Con unas obligaciones sin financiación prevista que alcanzan los 500 millardos de dólares, ahora todo el mundo se está rompiendo la cabeza para encontrar la solución al problema; reducir bene-

---

<sup>29</sup> Véase [www.saveuc.org](http://www.saveuc.org) y el blog *The New Universidad de California* para estar al tanto de las noticias.

ficios, incrementar las contribuciones, aumentar la edad de jubilación y optar por planes de pensiones privados<sup>30</sup>. La construcción de un tren de alta velocidad entre el área de la Bahía y Los Ángeles debería considerarse como una muestra de visión de futuro, aunque éste llega con cerca de treinta años de retraso. Hace una generación el corredor aéreo entre Los Ángeles y San Francisco era uno de los más transitados del mundo, los precios del suelo se mantenían en niveles razonables, y una línea férrea habría situado a California al frente de la tecnología del transporte. Ahora queda irrisoriamente rebasada por las europeas y asiáticas. Además, a pesar de las nuevas ayudas federales y de la enorme emisión de obligaciones aprobada por los votantes, puede que el estado no sea capaz de hacer frente a un precio desproporcionado, mientras el proyecto está viéndose obstaculizado por objeciones locales al trazado, en particular por las de los prósperos residentes de la península de San Francisco.

Uno de los asuntos en los que la capacidad para pensar a largo plazo ha quedado en evidencia es la respuesta dada al cambio climático. El historial de la política de conservación energética de California data de la década de 1970, lo que ha determinado que la tasa de gasto energético per cápita del estado sea una de las más bajas de Estados Unidos. En 2006 la asamblea legislativa aprobó la AB32, una ley que obligaba a reducir las emisiones de gases contaminantes en un 25 por 100 para 2020. El gobernador Schwarzenegger se apuntó al carro medioambiental y los capitalistas de Silicon Valley vieron la posibilidad de ampliar sus ganancias gracias a las nuevas tecnologías requeridas. Cuando, en noviembre de 2010, dos compañías petrolíferas de Texas trataron de utilizar la actual recesión como excusa para rescindir la AB32 por medio de una proposición electoral, los votantes rechazaron decididamente la iniciativa por un porcentaje del 61 frente al 39 por 100. La oposición no sólo procedió de los defensores del medioambiente, sino del grupo de presión vinculados al TechNet de Silicon Valley –lo que comprende a empresas tales como Google, Yahoo y Apple– y a las entidades de capital riesgo. Los capitalistas del Valle se cuentan entre los pocos de Estados Unidos que todavía sienten un interés mayor por la producción y la innovación que por la especulación, y que comprenden hasta qué punto dependen de los planes gubernamentales<sup>31</sup>. Pese al intento fallido de la Administración de Obama por impulsar el frente climático, California todavía tiene posibilidades de liderar la transición a una economía verde.

Durante el período de posguerra, la prosperidad de California estuvo garantizada por la inversión masiva del gobierno y contó con la supervisión de una Administración reformada según los parámetros del *New Deal*. Al mismo tiempo, esa prosperidad descansaba sobre la base de una mano de obra

---

<sup>30</sup> «A Gold-Plated Burden», *The Economist*, 14 de octubre de 2010.

<sup>31</sup> Tom Abate, «Why Silicon Valley Faces Fresh Threats», *San Francisco Chronicle*, 11 de febrero 2010.

cualificada, compuesta por trabajadores generosamente remunerados, que contaban con el apoyo de los sindicatos y estaban orgullosos de ver a sus hijos avanzar gracias a la educación pública. California ha vivido de ese legado durante muchos años, incluso cuando se introdujo en la era de la competencia global y del neoliberalismo; de hecho, la continuidad de su éxito parecía reivindicar las bondades de la Nueva Economía, incluso cuando el resto del país naufragaba en un estupor postindustrial. Pero el Estado Dorado navegaba sobre el capital invertido. Hoy, California ha encallado en los arrecifes de la desigualdad y la división racial, de la educación deficiente y de un gobierno sin recursos, mientras que aquellos que se llenaron los bolsillos durante los tiempos del *boom* se han negado a compartir sus nutridas fortunas con los recién llegados. Sin el dinamismo de California, Estados Unidos perderá el motor principal de su crecimiento y continuará su largo declive. La nueva clase trabajadora de California tendrá que superar las barreras raciales e ideológicas, y demandar escuelas de calidad, un gobierno democráticamente responsable y acuerdos económicos más igualitarios, si queremos que exista alguna esperanza de revertir esta trayectoria funesta.